

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Giro a la izquierda y regreso del populismo [Turn left and return of populism]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Paramio, Ludolfo
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-06-24 12:34:09
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218313

Giro a la izquierda y regreso del populismo

El clima ideológico en América Latina ha cambiado. En algunos países donde existían partidos progresistas arraigados, esto ha posibilitado la llegada al gobierno de fuerzas de izquierda democrática. En otros, este cambio ha tomado la forma de populismo. La Venezuela de Hugo Chávez es el caso más notable del regreso del populismo en su forma tradicional redistribuidora. El artículo argumenta que, con una visión exagerada de su protagonismo regional y apoyado en las rentas del gas y del petróleo, Chávez corre el riesgo de convertirse en un elemento desestabilizador que proyecte la polarización de la sociedad venezolana al resto de América Latina.

Ludolfo Paramio

El Consenso de Washington hace agua

A partir de 1998, bajo el impacto de dos choques externos –la crisis asiática y la bancarrota rusa– el dinamismo que había caracterizado a las economías de América Latina en los primeros años de la década del 90 –con la excepción de las consecuencias del «efecto tequila» en México, Argentina y Uruguay en 1995– dio paso a un cierto estancamiento. Aunque en 2000 la región alcanzó 3,8% de crecimiento y recuperó el resultado de 1996, la tónica general en el cambio de siglo fue la de un «lustró perdido», en expresión del entonces secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), José Antonio Ocampo.

Ludolfo Paramio: profesor de Investigación en la Unidad de Políticas Comparadas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid. Compilador, junto con Marisa Revilla, del libro *Una nueva agenda de reformas políticas en América Latina* (Fundación Carolina / Siglo XXI, Madrid, 2006).

Palabras clave: política, populismo, izquierda democrática, Hugo Chávez, Venezuela.

La gravedad de la crisis de la deuda había extendido a finales de los 80 –la «década perdida»– la idea de que era imprescindible cambiar el modelo económico, en la medida en que el anterior, el modelo proteccionista centrado en la intervención y el gasto público, no solo había dejado de funcionar, sino que parecía crecientemente inviable. Por ello, el giro radical que suponían las reformas estructurales fue ganando aceptación, respaldado por la fuerza de los hechos. Y hasta 1997 el crecimiento había generado cierto optimismo sobre el resultado de esas reformas, codificadas en el llamado «Consenso de Washington».

Pero el nuevo estancamiento de la economía hizo que el optimismo se disipara. Los costos sociales de la crisis de la deuda y de las reformas posteriores, que la continuidad del crecimiento económico debería haber restañado, no solo se hicieron más patentes, sino que se agravaron. Tras la disminución de la pobreza y la indigencia que se había producido entre 1990 y 1997, en 2002 ambos indicadores volvieron a crecer hasta 44% y 19,4%, respectivamente. De esa manera se extendió la percepción de que el Consenso de Washington no era capaz de cumplir sus promesas.

La elite política y económica comenzó a discutir la necesidad de una segunda generación de reformas, y a finales de 1999 una conferencia organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el tema planteó, como era inevitable, la vulnerabilidad del nuevo modelo a los choques financieros externos, origen de los nuevos problemas de la región. Además, se redescubrió la importancia de las instituciones como marco imprescindible para el buen funcionamiento de los mercados. Por esta vía regresó a la agenda política el papel del Estado en la sociedad y la economía, y se hizo evidente que en América Latina había existido una desmesurada presencia del Estado y, *a la vez*, un escandaloso déficit de Estado.

La crisis económica y política en Argentina, en diciembre de 2001, marcó probablemente el fin del Consenso de Washington. El FMI había presentado durante demasiado tiempo a este país como el mejor ejemplo del nuevo modelo económico, y la convertibilidad arrastró en su colapso la credibilidad de esta institución y de los organismos multilaterales. Lo que no deja de ser paradójico, si se tiene en cuenta que la convertibilidad no formaba parte del decálogo de Washington, y que muchos de los que defendían las reformas habían señalado sus graves riesgos al menos desde 1996.

La victoria de Luiz Inácio «Lula» da Silva en las elecciones presidenciales de 2002 fue otro momento decisivo en el giro de la región hacia posiciones

hostiles a las ideas neoliberales. Hay una nueva paradoja en ello, pues la política económica brasileña ha mantenido un control plenamente ortodoxo de la estabilidad monetaria, en clara contradicción con las críticas que el Partido de los Trabajadores (PT), desde la oposición, había formulado contra la gestión de Fernando Henrique Cardoso. Pero simbólicamente la elección de Lula, como la derrota de Carlos Menem frente a Néstor Kirchner en Argentina en 2003, fue la señal del cambio de clima político e ideológico en la región.

Se ha acuñado así, desde entonces, la idea de un *giro a la izquierda* en América Latina. Y, más allá de la valoración que se pueda hacer de los diferentes líderes y de sus programas, parece evidente que el triunfo de Tabaré Vázquez en Uruguay, en 2004, de Evo Morales en Bolivia, en 2005, y los de Michelle Bachelet en Chile y Alan García en Perú, en 2006, configuran una tendencia regional y no pueden considerarse simples coincidencias, aunque a la vez existan excepciones a esa tendencia tan notables como la reelección de Álvaro Uribe en Colombia.

Sin embargo, dentro de los gobiernos que podemos considerar de izquierda existe una llamativa divergencia en el discurso político, en la postura respecto

El giro a la izquierda está muy lejos de configurar hoy un modelo económico alternativo al Consenso de Washington

al proceso de globalización y en la interpretación de las instituciones democráticas y sus reglas de juego. La única coincidencia explícita es el hincapié en la política social y en la búsqueda de un modelo económico que no solo produzca crecimiento, sino también resultados sociales: creación de empleo, mejora de la educación y la salud, reducción de la pobreza y la indigencia. El *giro a la izquierda* está, por lo tanto, muy lejos de configurar hoy un modelo económico alternativo al Consenso de Washington.

Existe sin embargo otra coincidencia, más notable en un momento en que los gobiernos de Venezuela, Argentina y Bolivia son calificados con bastante frecuencia de populistas. Aunque el gobierno de Morales está aún en sus comienzos, tanto el de Chávez como el de Kirchner han demostrado ya una marcada preocupación por la estabilidad monetaria, que no permite encasillarlos en lo que Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards llamaron «populismo macroeconómico»¹. Uno de los principios fundamentales del Consenso de

1. V. *Trimestre Económico* N° 225, 1990, pp. 121-162 y «Macroeconomic Populism» en *Journal of Development Economics* N° 32, 1990, pp. 247-277.

Washington, la estabilidad macroeconómica y monetaria, parece haberse incorporado al sentido común y a la práctica de los gobiernos que más critican el neoliberalismo de los años 90.

¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo?

Si no estamos de nuevo ante un populismo económico caracterizado por la irresponsabilidad fiscal, ¿de qué hablamos cuando hablamos de populismo? Hay un primer sentido en el que se podría hablar de «discurso populista». Este discurso denuncia a la elite política anterior y al conjunto de los partidos políticos tradicionales como traidores a los intereses populares, para presentar a los nuevos gobernantes como verdaderos representantes de esos intereses. Y por ello pide el máximo respaldo social para evitar que la oposición bloquee la acción del gobierno desde las instituciones democráticas.

Parece evidente que Chávez y Morales comparten ese discurso, y que Kirchner no tuvo más que navegar en la corriente desatada por la crisis política de finales de 2001 y la consigna «que se vayan todos». Pero también es obvio que ese discurso tiene antecedentes muy próximos en los estilos de liderazgo de Menem y Alberto Fujimori. El nuevo discurso populista no sería más que una edición actualizada de lo que Guillermo O'Donnell llamó «democracia delegativa». En nombre de los intereses populares, el gobernante reclama poderes excepcionales y trata de escapar al control de las «viejas» instituciones.

Hay, sin embargo, una diferencia sustancial. El populismo de Menem y Fujimori trataba de realizar una agenda económica neoliberal, combinándola con políticas sociales clientelares para obtener a la vez el apoyo del empresariado, las clases medias y las clases populares. El «nuevo populismo» que preocupa a los observadores no comparte esa agenda neoliberal, aunque mantenga el principio de responsabilidad fiscal. Por el contrario, hace gala de un agresivo nacionalismo y de un estilo confrontacional con los inversores extranjeros, sean empresarios o simples ahorristas. Curiosamente, solo Chávez, cuyo triunfo electoral en 1998 puede considerarse el origen del nuevo populismo, ha centrado su estilo confrontacional en los empresarios nacionales.

Parece lógico pensar, en este sentido, que lo que ha cambiado en los últimos años es el clima ideológico, por decirlo de alguna manera. El Consenso de Washington ha perdido gran parte de su credibilidad y se ha producido una reacción en contra de las ideas que lo respaldaban, de lo que podríamos llamar el «paradigma neoliberal». Este cambio de clima ha favorecido a los

candidatos de izquierda –como Lula, Tabaré o Bachelet– en aquellos lugares en los que estas opciones existían y tenían credibilidad como alternativas de gobierno.

En cambio, en los países donde, debido a las características del sistema de partidos o a circunstancias específicas, estas condiciones no se daban, o bien el giro a la izquierda no se ha producido o ha tomado la forma atípica –al menos desde el punto de vista europeo– de lo que llamamos populismo. Un populismo que en algunos aspectos se distancia del original, del «populismo histórico» de los años 30 y 40 del siglo pasado, pero que en otros se le asemeja, en buena medida porque responde a problemas relativamente similares.

En efecto, la clave de las experiencias de Juan Perón y Getulio Vargas en aquellos años era la crisis del sistema de representación y la existencia de amplios grupos sociales que se sentían excluidos económicamente y no encontraban una vía para que sus necesidades fueran atendidas por los gobiernos. Esas dos condiciones se han vuelto a dar a comienzos del nuevo siglo en algunos países, y no es demasiado sorprendente, por tanto, que se haya repetido la emergencia de liderazgos populistas.

Es fácil comprender que el crecimiento de la pobreza y la frustración ante el incumplimiento de las promesas de reformas estructurales han hecho que amplios sectores no solo populares, sino también de la clase media, se sientan maltratados y excluidos ante un mercado que consideran adverso, y que no sepan cómo hacer oír su voz. Esto es lo más importante: en muchos países los sistemas de partidos establecidos no han generado ofertas políticas creíbles que permitieran a estos sectores sentirse representados. Y, a consecuencia de ello, ha ido creciendo el escepticismo hacia las instituciones políticas en su conjunto.

Esta ausencia de alternativas se explica en gran parte por el cambio de reglas sociales y económicas que conllevaron las reformas estructurales. Los partidos con capacidad de gobierno debieron interiorizar las nuevas reglas, y con ello perdieron capacidad para hacer frente a las demandas sociales provocadas por el estancamiento de finales de los años 90. La adaptación al nuevo juego y a la lógica de una economía liberalizada fue en bastantes casos traumática, y no siempre fue acompañada por un cambio profundo de los grupos dirigentes. Era improbable que estos mismos partidos, pocos años después de su conversión al discurso del liberalismo económico, fueran capaces de asumir la crisis del paradigma liberal a ojos de la opinión pública.



Sin embargo, esta crisis era perfectamente observable en las encuestas. Desde 1998, Latinobarómetro reflejó un descenso de la confianza en las instituciones democráticas que a todos llamó la atención, paralelamente a una caída de la visión positiva de las privatizaciones y de la confianza en el mercado. Era evidente que los ciudadanos esperaban algo más de los gobernantes que la reiteración del discurso económico liberal que había legitimado las reformas.

***El triunfo de Chávez
en 1998 fue fruto del
desfondamiento de los
partidos tradicionales
tras la crisis de
Acción Democrática
y la nueva frustración
ante el gobierno
de Rafael Caldera***

Buscaban, también, protección social pública frente a un mercado en el que no encontraban oportunidades ni seguridad.

El triunfo de Chávez en 1998 fue fruto de este clima y del desfondamiento de los partidos tradicionales tras la crisis de Acción Democrática y la nueva frustración ante el gobierno de Rafael Caldera. Pero la aparición de liderazgos populistas no exige necesariamente un colapso previo del sistema de partidos. La condición fundamental es la existencia de una crisis de representación en el sentido apuntado antes: que una parte importante de la sociedad sienta que ninguno de los partidos existentes representa sus intereses.

Es obvio, por otra parte, que la consolidación de un liderazgo populista contribuye a profundizar la crisis de los partidos preexistentes, ya que su discurso fomenta el descrédito de éstos, y a menudo sus políticas están dirigidas a socavar los mecanismos de funcionamiento de la representación, erosionando sus bases sociales y recortando su papel en las instituciones. En último término, el ataque a la supuesta «oligarquía política» conduce casi inevitablemente a un ataque a las propias instituciones políticas –más allá de los partidos– y al intento de crear una nueva institucionalidad a la medida del régimen populista, lo que puede tener efectos negativos muy duraderos para la vida política democrática, más allá del propio ciclo populista.

Los costos políticos del populismo

Si nos atenemos al populismo como fenómeno político, su crítica debe partir de las consecuencias que tiene para la democracia y sus instituciones, antes de analizar su política económica e independientemente de que ésta encaje o no en el estereotipo del populismo económico. Por ejemplo, se pueden estudiar las consecuencias de los gobiernos de Menem y Fujimori con independencia de que su política económica fuera neoliberal. Y parece que el balance

de ambos gobiernos fue negativo en el sentido de que condujeron al desmantelamiento o la perversión de las instituciones democráticas, y muy en particular de las que cumplen la función de contrapesar o controlar al Poder Ejecutivo.

Como es sabido, en ambos casos se manipularon las Cortes Supremas y las Cámaras Legislativas –en el caso de Perú, tras la ruptura institucional de 1992– para lograr que nada pudiera frenar la actuación del Ejecutivo. Y, de forma totalmente previsible, en ambos casos esa ausencia de controles vino acompañada de fuertes irregularidades en la gestión y de una corrupción casi generalizada, en buena medida aprovechando las oportunidades creadas por la propia liberalización de la economía, y en particular por las privatizaciones.

Conviene subrayar que el éxito de este vaciamiento de las instituciones (y de las arcas) del Estado estuvo favorecido por una situación objetiva y por las ideas dominantes en aquel momento. La crisis hiperinflacionaria provocó en las sociedades argentina y peruana una necesidad apremiante de un liderazgo salvador. La «democracia delegativa» era, en buena medida, fruto de esa necesidad colectiva de encontrar un gobernante capaz de dar salida a una situación insostenible, y en el que se ponía una confianza no condicionada.

Pero hay que recordar, además, que el programa de reformas económicas estuvo acompañado en bastantes ocasiones por la recomendación de que el Ejecutivo se blindara frente a las presiones populares, para evitar la paralización de las reformas o el inicio de un nuevo ciclo de *economía populista*. Así, lo que en condiciones normales sería visto como arbitrariedad y autoritarismo, fue considerado una necesidad para proteger las decisiones económicas del gobierno y permitir que éstas se desarrollaran con racionalidad y coherencia. Es bastante evidente, sin embargo, que si se recomienda privar de poder de control a las instituciones democráticas, no tiene sentido asombrarse después de que proliferen la corrupción y la arbitrariedad.

Mientras que Menem, pese a sus diferencias iniciales con el Partido Justicialista, se mantuvo dentro de él y lo controló hasta su enfrentamiento con Eduardo Duhalde en torno de su frustrada segunda reelección, Fujimori prosiguió además una estrategia deliberada para triturar los partidos preexistentes, aprovechando la crisis de sistema que se había producido alrededor de las elecciones de 1990. De hecho, llevó su desconfianza hacia los partidos como instituciones políticas mucho más lejos que cualquier otro político populista

***Después del
populismo no solo
es preciso recuperar
las instituciones
democráticas, sino
también la confianza
de los ciudadanos
en ellas***

anterior, creando fuerzas políticas *ad hoc* para las sucesivas convocatorias electorales y desechándolas después.

La herencia política del populismo, en ese sentido, es de una enorme gravedad, con total independencia de su balance económico o de las consecuencias de su política social. Porque después del populismo no solo es preciso recuperar las instituciones democráticas, sino también la confianza de los ciudadanos en ellas. Si, además, el propio sistema de partidos ha resultado arrasado por el gobierno populista, el problema de la crisis de representación se agrava, y se hace mayor la dificultad de reconstruir identidades partidarias capaces de estabilizar la representación política.

En este punto es necesario señalar que la estabilidad de la representación no es una cuestión normativa, sino una necesidad para lograr el buen funcionamiento de la democracia. Por estabilidad se entiende una continuidad de los actores políticos que permite al público premiarlos o castigarlos según los resultados de su gestión o a la vista de su conducta en la oposición. Un partido sólo estará obligado a ser responsable si debe ser juzgado por los ciudadanos en ocasiones sucesivas: un partido que no prevea durar más de un ejercicio electoral será mucho más proclive a desarrollar prácticas oportunistas o simplemente depredadoras, como un déspota que no se planteara la necesidad de asegurar el futuro de la sociedad sobre la que domina.

Al comienzo del nuevo siglo, el populismo ha regresado a su forma tradicional de populismo redistribuidor. El ejemplo más notorio es, por supuesto, el del régimen bolivariano en Venezuela. Como es bien sabido, el primer y arrollador triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998 fue consecuencia del masivo repudio acumulado por los partidos tradicionales, pero también de la frustración social tras los costos de las reformas del gobierno de Carlos Andrés Pérez y del ajuste de 1997 realizado por Rafael Caldera.

La retórica de Chávez de rechazo a los partidos como cómplices de la oligarquía y traidores a los intereses populares constituye un ejemplo de manual de discurso populista. Pero también es clásico el proceso de reconstrucción de las instituciones políticas para eliminar cualquier obstáculo al nuevo régimen «bolivariano». Más allá de la forma de gobernar de Chávez, es indiscutible que sus nuevas reglas de juego cumplen formalmente los criterios democráticos

—aunque la oposición haya formulado repetidas acusaciones de manipulación, coacción de la disidencia y fraude electoral— y que su liderazgo ha pasado por más pruebas electorales que el de ningún otro gobernante latinoamericano.

La clave de su consolidación es, sin duda, haber conseguido que los sectores más pobres y excluidos de la sociedad venezolana vean en él a un gobernante que cuida de ellos, frente a la imagen de que los políticos tradicionales solo se dedicaban a robar y no se preocupaban por el pueblo. Se puede discutir la eficacia de la política social desarrollada por las «misiones» chavistas, la falta de transparencia de su financiación o la lógica clientelar de su diseño y ejecución, pero no es fácil negar que han tenido como resultado un significativo apoyo popular al régimen y, en determinados sectores, una identificación con él similar a la que en su momento alcanzaron los populismos clásicos.

El problema es que esta identificación se ha producido en medio de una creciente polarización de la sociedad venezolana. Dado que el gobierno de Chávez tiene una indudable vocación de continuidad y que no es probable que vaya a ser derrotado en las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, es muy posible que esta polarización deje secuelas duraderas. Existen en otros países, especialmente Argentina, ejemplos de las consecuencias negativas para la democracia de una división de la sociedad en dos bloques, incluso si descartamos acciones como la de abril de 2002. La alternancia en el poder, hoy por hoy, no es un hecho previsible ni «normal» teniendo en cuenta las condiciones que se han creado en Venezuela.

Además, el nuevo populismo ha dado origen a tensiones regionales en los últimos meses, precisamente en un momento en que la buena marcha de la economía y la opinión de amplios sectores parecían haber creado las condiciones para avanzar hacia una mayor integración y una mejor coordinación de las políticas nacionales. La salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones —a la vez que se incorpora al Mercosur— y el enfrentamiento de Chávez con el ex-presidente de Perú, Alejandro Toledo, y su sucesor, Alan García, en relación con cuestiones internas peruanas, han hecho crecer el temor a que la política del presidente venezolano dé origen a tensiones y enfrentamientos graves en América del Sur.

Siempre se puede considerar que no se trata de problemas de fondo, sino de simples manifestaciones del carácter imprevisible del líder venezolano, y que a mediano plazo se les dará salida. Pero el enfrentamiento entre el nuevo

gobierno boliviano de Evo Morales y la compañía estatal brasileña Petrobrás ha creado una situación ardua para Lula, y es difícil evitar la sospecha de que detrás de esta movida está también la visión estratégica de Chávez de convertir a la compañía petrolera venezolana, Pdvsa, en una alternativa a Petrobrás. Se abre paso así la posibilidad de que una visión exagerada de su protagonismo regional, apoyada en las rentas del gas y del petróleo, se convierta en un elemento desestabilizador.

La polarización creada en Venezuela por el liderazgo populista podría entonces convertirse en una polarización regional. Es bastante evidente que hoy América Latina cuenta con gobiernos pragmáticos y responsables que no se dejarán llevar fácilmente por la vía del enfrentamiento. Pero también es indudable que los riesgos están ahí, y que el descontento social facilita la exportación de un discurso y de una forma de hacer política, como ha mostrado el rápido auge de Ollanta Humala en las elecciones de Perú.

La izquierda y el populismo

¿Es posible ofrecer una alternativa de izquierda al populismo? El primer problema es que, para muchos sectores progresistas, el populismo es ya una política de izquierda, en la medida en que introduce medidas sociales y económicas favorables a las mayorías. Así, incluso partidos que defienden el socialismo democrático pueden entender que en otros países el populismo es la expresión real de la izquierda.

El populismo, incluso si se somete a las reglas de juego de la democracia, no es un proyecto democrático

Pero el populismo, incluso si se somete a las reglas de juego de la democracia, no es un proyecto democrático. Divide a la sociedad a través de su distinción maniquea entre sectores populares y oligárquicos, basa su discurso en la confrontación y no pretende crear ciudadanos, sino seguidores. Por otra parte, la dinámica política del populismo puede derivar fácilmente en políticas económicas poco o nada responsables, ya que su prioridad es la redistribución clientelar en lugar de la inversión y la transformación de la sociedad.

Pese a que estas distinciones deberían ser claras, no es tan fácil argumentarlas, por dos razones. La primera es que en muchos países de la región no hay partidos fácilmente identificables con la izquierda democrática. La segunda, que en el actual contexto de crisis de representación, y a la vez de agotamiento

del programa neoliberal, los discursos populistas pueden tener mucho más atractivo que los programas de la izquierda democrática, que, tras los cambios que se han producido en estos años, sabe que no se pueden ofrecer soluciones milagrosas a los problemas más graves.

De nada sirve denunciar los males de la globalización si no se busca una inserción en ella que ofrezca posibilidades de crecimiento económico sostenible; de poco sirve redistribuir en favor de los sectores populares si no se consigue paralelamente mejorar la educación, la salud y las infraestructuras; y a nada conduce plantearse ambiciosas metas en estos campos si no se cuenta con los recursos fiscales necesarios. Un programa de izquierda democrática debe combinar metas muy concretas (y por tanto limitadas) y un proyecto de transformación a largo plazo, un proyecto de futuro.

Puestos a elegir entre el talante mesiánico de los líderes populistas y la necesaria mesura de los programas de izquierda, grandes sectores sociales pueden sentirse más atraídos por las promesas y el discurso de confrontación del populismo. Sin embargo, lo que explica el auge actual de los planteamientos populistas en América Latina no es su fácil atractivo, sino, como se ha venido argumentando, el descrédito del sistema de partidos y la ausencia o crisis de los partidos que podrían representar un proyecto de izquierda democrática.

No es casual que los tres casos más claros de tales proyectos se den actualmente en países en los que la izquierda poseía una expresión partidaria arraigada. En Chile, las diferentes formaciones del área socialista, en coalición con la democracia cristiana, se han mantenido en el gobierno pese a las dificultades que en la segunda mitad de los años 90, bajo el impacto de la crisis asiática, sufrió la economía. El PT, en Brasil, y el Frente Amplio, en Uruguay, se han consolidado durante años como partidos de oposición y han ido evolucionando hacia el realismo económico según aumentaban sus posibilidades de gobernar.

Esto puede significar que el principal problema de la izquierda democrática no es la competencia con el populismo, sino la falta de identidades partidarias de izquierda socialmente arraigadas y con credibilidad y coherencia en el plano de las ideas. Evidentemente, son dos condiciones muy fuertes: el arraigo social exige años de trabajo político y organizativo, relación con las organizaciones sociales y presencia en ellas; la credibilidad y la coherencia de las ideas no solo supone buena información sobre los problemas nacionales y cierta comprensión de cómo funciona el mundo, sino también haber logrado

una síntesis entre las ideas de quienes vivieron experiencias anteriores y las propuestas para el futuro.

Resumiéndolo con una fórmula, para poder competir con el populismo hace falta una izquierda con historia pero también con ideas nuevas, y para lograr esto último puede ser necesario un relevo generacional entre los dirigentes. No es raro, conociendo la historia de la región y la forma en que funcionan las organizaciones políticas, que sea tan difícil que las dos condiciones se den a la vez. Allí donde existe una izquierda con historia es más difícil que se produzca el relevo generacional, y cuanto más minoritaria y fragmentada es la izquierda mayor es la tendencia al conservadurismo o al oportunismo entre los grupos dirigentes.

Por último, hay que señalar una dificultad añadida, derivada de la tensión entre las limitadas metas que un gobierno de izquierda puede plantearse de forma inmediata y la ambición de sus objetivos a mediano y largo plazo. Esta tensión, aunque se manifiesta en debates ideológicos o políticos en las fuerzas de izquierda democrática, puede ser positiva en la medida en que exista un liderazgo reconocido y un cierto consenso (realismo) sobre las limitaciones y los condicionantes de la acción de gobierno. Pero puede, también, conducir a la crisis o a la división si el liderazgo se debilita o si la opinión pública gira en contra del gobierno.

El caso más evidente es el de los problemas internos del PT. Las diferencias ideológicas se han agudizado desde que los escándalos de financiación mancharon al gobierno, y desde que, a consecuencia de estos mismos hechos, cayó la valoración pública de Lula y de su gobierno. Es inevitable que las diferencias ideológicas se utilicen como línea de separación frente a las personalidades o grupos cuya imagen ha resultado más afectada por los escándalos, pero por esta vía es fácil caer en un falso debate. Las posibles irregularidades en la financiación electoral no tienen nada que ver con los tipos de interés, el ritmo de la reforma agraria o los resultados de la política social.

La izquierda no solo tiene que enfrentar la competencia del populismo, sino que debe ser capaz de mantener la cohesión pese a sus diferencias internas entre lo deseable y lo posible en cada momento. Si la izquierda democrática permite que se magnifiquen las diferencias ideológicas dentro de ella, crecerán los riesgos de su fragmentación e irrelevancia, la desconfianza de los electores hacia la política democrática se extenderá y profundizará y el populismo aparecerá como la única alternativa. Quienes creemos en el socialismo democrático deberíamos tratar de evitarlo. ☐